

LA INSOSTENIBLE DESIGUALDAD SOCIAL

David Ibarra
18 de abril de 2006

Como reacción natural, los derechos humanos han cobrado relevancia a paso y medida que se eliminan las fronteras económicas, se reducen las tasas de crecimiento mundial y se ahondan las disparidades del bienestar de las poblaciones entre y dentro de los países. Los derechos civiles y políticos se respetan y observan como con alguna excepción pero con escrupulosidad, correlato del ascenso generalizado de la democracia liberal en casi todas las latitudes.

Sin embargo, el perfeccionamiento gradual de los derechos humanos queda trunco ante los escollos para asegurar estándares mínimos de vida y seguridad social a los grupos mayoritarios de la población. En más de un sentido la prevalencia crónica de la pobreza o la marginación, hacen nugatorios, o limitan, los avances de la modernización política.

El primer grupo de fenómenos adversos proviene de la pérdida del impulso al crecimiento y el consecuente desvanecimiento de la capilaridad social como remedio a la secularmente inequitativa distribución del ingreso en nuestro país. De compararse el periodo 1950 y 1980, con el de 1980-2004, la expansión del ingreso por habitante baja del 3.3 % al 0.45%.

Veamos algunas cifras indicativas del bienestar nacional. La población por debajo de la línea de la pobreza es ligeramente menor al 40% (2002), los indigentes suman el 13%. La participación de las familias más pobres (primer decil) en el ingreso asciende apenas al 1.3%, las de las familias más ricas (último

decil) al 40.5%. La escolaridad media de los pobres (1.3 años en promedio) no mejora entre 1984 y 2002, la del estrato de mayor ingreso sube de 9 a 13.3 años.

Los desequilibrios en el mercado de trabajo son mayúsculos. Entre 1998 y 2004 el empleo agrícola se redujo en 600 puestos de trabajo, y el manufacturero (excluida la maquila) se estanca. Sólo el sector de servicios, refugio de la informalidad subió a razón del 2.4%. La precarización de las condiciones laborales sigue en ascenso. En ese lapso, los ocupados sin prestaciones abarcan a más del 60% de la fuerza de trabajo. Los asalariados sin prestaciones --en contravención de las normas laborales-- asciende a 11 millones. Los trabajadores en mini-empresas (establecimientos de menos de 5 personas) --se aproximan a 24 millones. Los trabajadores informales suman entre el 30% y 50% de la población activa.

Los salarios mínimos en términos reales han caído 70% desde 1980 y los contractuales por lo menos 25%; la participación de los trabajadores en el ingreso ha caído del 41% (1980) al 30% (2003). Más del 60% de la fuerza de trabajo no está amparada por ninguno de los sistemas de seguridad social. Movidas por el hambre y la falta de oportunidades, alrededor de 400 mil personas por año cruzan ilegalmente la frontera norte del país.

Tal situación proviene en parte de la jerarquización y separación entre las políticas económicas, las sociales y las que atañen a la democracia. Esta última ha dado en confinarse a elecciones libres y alternancia en el gobierno. En la práctica, el juego político y los alcances de la política social quedan supeditados a satisfacer los llamados fundamentos económicos que esencialmente buscan la estabilización de precios o al equilibrio entre gastos e ingresos públicos. Por tanto, se asegura alguna circulación de las élites, pero se descuida la satisfacción

de las demandas mayoritarias de la población. De su lado, la política social y el avance de los derechos humanos quedan presos en proyectos microsociales que si bien racionalizan el gasto público y focalizan la ayuda a los grupos más necesitados, carecen de los alcances necesarios al propósito de elevar el bienestar de toda la sociedad. En efecto, al descuidarse el crecimiento económico y el equilibrio dinámico del mercado laboral, el papel de la política social resulta limitado a paliar las consecuencias polarizadoras o excluyentes de las políticas neoliberales.

En la ideología conservadora, el gasto social tiende a verse como fuente de distorsiones intervencionistas o populistas, como enemigo de la estabilidad de precios, de la inversión y de la eficiencia productiva. No suele aceptarse que la seguridad social no es contraria al desarrollo, ni el gasto social es un lujo. Cuesta todavía reconocer que ambos desempeñan funciones importantísimas en legitimar a los gobiernos, ampliar los mercados internos, elevar la productividad, fortalecer la solidaridad ciudadana, como también que la pobreza y desigualdad son fenómenos antagónicos a la democracia.

En el caso de México, las ideas sintetizadas en los párrafos previos acaso debieran conducir a una serie de cambios en la manera de encarar problemas que no se han resuelto en las últimas décadas. El primer paso podría consistir en abandonar el debate infecundo entre del Estado y mercado. Se trata de instituciones complementarias, una para ensanchar capacidades productivas y ganar competitividad, la otra, para suturar rupturas sociales y conciliar eficiencia con mínimos de igualdad.

Con el triunfo de más y más partidos progresistas en América Latina, la crítica al Estado se trasmuta sutilmente en crítica preventiva al populismo,

identificado como el intervencionismo gubernamental derrochador de los recursos públicos. Sin negar hechos históricos que se ajustaría a esa definición, el antipopulismo de nuestros días disfraza resistencias de las élites a aceptar políticas redistributivas de alcances mínimos, y a la par entremezclar muy distintas clases de populismo, incluido el que conduce al despilfarro del patrimonio estatal por la vía de ventas o privatizaciones subvaluadas de bienes públicos, los salvamentos bancarios o de empresas privadas, la reducción de impuestos a la renta y otros expedientes. En rigor, todo populismo es criticable, pero no debiera englobar ni ser confundido con políticas sociales legítimas, dirigidas a corregir injusticias flagrantes o evitar polarizaciones insostenibles en la vida ciudadana.

En ese sentido, habría de convenirse que democracia, economía y sociedad no forman compartimentos estanco, ni aceptan la subordinación de unas políticas a las otras. En consecuencia, la selección de las grandes metas nacionales ha de ser equilibrada, participativa y difícilmente debiera reducirse a los objetivos estabilizadores dominantes. Habría que combinar el combate ya casi ganado a la inflación con la búsqueda del crecimiento y el empleo; facilitar el tránsito gradual de la democracia formal a la democracia sustantiva de los derechos humanos; iniciar la democratización de la política económica; reconceptualizar y hacer convergentes los discursos de la democracia y el desarrollo por representar los valores postmodernos de la emancipación ciudadana.

El país necesita rehacer su pacto social básico, semiderruido por los cambios económicos, la desaparición del presidencialismo hegemónico y los vuelcos desesperados de las políticas sociales. La tarea inicial reside en hacer viable el adosar a los políticas microsociales vigentes, acciones de carácter

macrosocial que pongan dique a los desajustes insostenibles de los mercados de trabajo y al deterioro del bienestar de los grandes estratos marginados de la población. No se trata de una tarea fácil, implica conciliar intereses contrapuestos y hacer otro tanto con las principales metas o propósitos nacionales. No es tampoco una tarea imposible como lo demuestran los largos períodos de crecimiento nacional sostenido o la prosperidad envidiable de otros países periféricos, inmersos por igual en el intercambio globalizador.